



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN  
DE SENTENCIAS DE CALI**

SENTENCIA DE TUTELA No. 119

Santiago de Cali, 5 de junio de 2023

**REFERENCIA:** ACCIÓN DE TUTELA  
**ACCIONANTE:** FREDY VARGAS  
**ACCIONADO:** SECERTARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI  
**RADICACIÓN:** 009-2023-00116-00

Proveer acerca de la acción de tutela instaurada por FREDY VARGAS contra la SECERTARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CLI, por la presunta vulneración a los derechos fundamentales de petición y debido proceso .

**II.- ANTECEDENTES**

La parte accionante manifiesta en los hechos lo siguiente:

*“Que el derecho de petición fue radicado el 18 de abril de 2023 respecto del comparendo con No. 76001000000018623557*

*Que a la fecha de presentación de la acción de tutela no se ha recibido respuesta alguna por parte de la entidad accionada, SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE CALI, vulnerándose así el derecho fundamental de petición.”*

**III. TRÁMITE PROCESAL**

El Juzgado mediante el auto interlocutorio No. 1541 del 23 de mayo de 2023, admitió la acción de tutela e informó a la entidad accionada SECERTARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI sobre la presente acción constitucional y concedió el término de dos (02) días para que procediera a ejercer su derecho a la defensa conforme a los hechos expuestos en el libelo de la tutela.

**Contestación de la parte accionada.**

**- SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI:**

por intermedio del Dr. ANDRES QUIMBAYO ROJAS, en calidad de JEFE DE OFICINA DE CONTRAVENCIONES, indicó que:

*“Se manifiesta respetuosamente al despacho de la Honorable Juez que, es cierto que el accionante impetró petición ante este Organismo de tránsito al cual se le asignó radicado N° 202341730100764102, sin embargo, al mismo que fue resuelto de fondo a través del oficio de salida N° 202341520100908981 del 05 de mayo del 2023, se resolvió la petición instaurada por el accionante en su totalidad.*

*Dicha respuesta fue notificada de manera efectiva el día 26 de mayo de la vigencia, a las 08:53 horas, por medio del correo electrónico aportado por la parte accionante en el escrito de petición y en el libelo de tutela, el cual corresponde a "juzgados+ld- 249051@juzto.co". Tal como se logra evidenciar en documento anexo a este escrito de contestación".*

#### **IV.- CONSIDERACIONES**

**1.-** Este despacho es competente para asumir y definir el trámite constitucional iniciado por la accionante.

**2.-** El problema jurídico que se somete a consideración del despacho estriba en determinar si existe o no vulneración del derecho fundamental de la parte accionante, a cargo de la parte accionada.

**3.-** La acción de tutela ha sido concebida, como un procedimiento preferente y sumario para la protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular en los casos que determine la ley.

Así las cosas, la efectividad de la acción, reside en la posibilidad de que el juez si observa que en realidad existe la vulneración o la amenaza de derechos fundamentales de quien solicita protección, imparta una orden encaminada a la defensa actual de la garantía constitucional afectada.

#### **V.- MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL**

Como mecanismo de carácter constitucional, la acción de tutela está encaminada a la protección de los derechos fundamentales de la persona. No obstante, esta protección se hace extensiva a derechos económicos, sociales y culturales, o colectivos, cuando estos están en íntima conexión con derechos catalogados como fundamentales, de tal forma que su no amparo causaría la vulneración de aquellos.

##### **1.- El derecho fundamental de petición**

En relación con el sentido y alcance del derecho de petición, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha trazado algunas reglas básicas acerca de la procedencia y efectividad de esa garantía fundamental:

El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible; la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del

deber de responder y ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado.<sup>1</sup>

Como lo ha manifestado la Corte Constitucional, el derecho de petición es un derecho fundamental, cuya efectividad resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituidas<sup>2</sup>.

## **2.- Término establecido en la normatividad para contestar derecho de petición.**

Frente a este punto, es importante resaltar que la Ley 1755 de 2015 por medio de la cual se reguló el Derecho Fundamental de Petición determinó que:

*“Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, **toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.***

*Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:*

*1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.*

*2. **Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.***

*Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”. (Resaltado propio)*

Así las cosas, atendiendo a que el Derecho de petición es de carácter fundamental, la carencia de respuesta de fondo y **oportuna**, puede conllevar a la intervención del juez constitucional en virtud del ejercicio de la acción de tutela. En ese sentido, la respuesta deberá generarse dentro del término legal establecido y deberá notificarse en debida forma al peticionario.

## **3.- Carencia actual del objeto por hecho superado.**

La carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial

---

<sup>1</sup> Sentencia T-511 de 2010

Sentencia T-200/13 - El fenómeno de la carencia actual de objeto tiene como característica esencial que el orden del/de la juez/a de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún efecto, esto es, caería en el vacío. Lo anterior se presenta, generalmente, a partir de dos eventos: el hecho superado o el daño consumado. Por un lado, la carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo -verbi gratia se ordena la práctica de la cirugía cuya realización se negaba o se reintegra a la persona despedida sin justa causa-, razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante el orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna.

en tal sentido se torna innecesaria. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna.

Respecto a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte Constitucional ha indicado que el propósito de la acción de tutela se limita a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.

Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón de ser, pues en estas condiciones no existiría una orden que impartir. Por otro lado, la carencia actual de objeto por daño consumado se presenta cuando la vulneración o amenaza del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro, y lo único que procede es el resarcimiento del daño causado por la vulneración del derecho fundamental.

Con los anteriores fundamentos legales y jurisprudenciales estudiados entra el Despacho a resolver el caso en concreto.

## **VI.- CASO CONCRETO**

En el caso sometido a estudio se tiene que el señor FREDY VARGAS presentó derecho de petición ante la SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI el 18 de abril de 2023, esto respecto del comparendo con No. 76001000000018623557, aduciendo que hasta la fecha de presentación de la tutela no se había dado respuesta frente al mismo.

Por su parte la entidad accionada manifestó que el derecho de petición impetrado por el accionante fue resuelto de fondo a través del oficio de salida N° 202341520100908981 del 05 de mayo del 2023, la cual le fue notificada de manera efectiva el día 26 de mayo de año en curso al correo electrónico aportado por el actor, el cual corresponde a "juzgados+Id-249051@juzto.co". para lo cual se aportó el comprobante de envío.

Ahora bien, es de indicar como primera medida que el art. 23 de la Constitución Política y ahora elevado a Ley estatutaria mediante la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, regula lo atinente al derecho de petición, el cual es considerado básicamente como la facultad que tienen los ciudadanos de formular solicitudes o de pedir copias de documentos no sujetos a reserva, a las autoridades correspondientes y a las organizaciones e instituciones privadas y obtener de éstas una pronta y completa respuesta sobre el particular.

Dicha Ley potencializa la protección de este derecho fundamental, determinando entre otras cosas que ninguna entidad privada- sea organización o institución- podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas, so pena de incurrir en sanciones y multas por parte de las autoridades competentes.

En relación con el contenido y alcance de dicho derecho la Corte ha explicado que es un derecho fundamental y que su contenido esencial comprende varios elementos, a saber: la posibilidad de acudir ante la administración y organizaciones privadas para elevar solicitudes y recibir respuesta que debe ser oportuna, de fondo y comunicada al peticionario.

En sentencia C-510 de 2004, la Corte expresó, con reiteración de su propia jurisprudencia:

*“Es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a.-) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b.-) La respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c.-) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados, excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d.-) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario con independencia de que su sentido sea positivo o negativo”.*

Así mismo se ha indicado por la Corte que la respuesta a un derecho de petición, ES SUFICIENTE, cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; ES EFECTIVA, si soluciona el caso que se plantea; y ES CONGRUENTE, si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta.

Por consiguiente, se perfecciona este derecho cuando la persona obtiene por parte de la entidad demandada una respuesta de fondo, clara, oportuna y en un tiempo razonable a su petición.

En relación con este último aspecto, es decir con la oportunidad de la respuesta, en el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general se acude al artículo 6 del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

Descendiendo al caso que nos ocupa, es de señalar que del análisis del expediente tutelar se logra advertir que la accionada demostró haber dado respuesta a la petición presentada por el accionante, no obstante, se encuentra que dicha respuesta fue enviada erróneamente al correo [juzgados+ld-249051@juzto.co](mailto:juzgados+ld-249051@juzto.co), siendo lo correcto [juzgados+LD-249051@juzto.co](mailto:juzgados+LD-249051@juzto.co), tal como se logra evidenciar a continuación:

<b>Estado de entrega</b>		
<b>Dirección destino</b>	<b>Fecha de envío</b>	<b>Estado actual</b>
juzgados+ld-249051@juzto.co	2023-05-26 08:53:36	Recibido por el servidor del destinatario
<b>Asunto</b>	<b>Fecha de entrega</b>	<b>Fecha de leído</b>
Respuesta solicitud con Radicado No. 202341730100764102.	2023-05-26 08:53:39	

De esta forma el Juzgado considera que en el presente asunto se ha vulnerado el derecho de petición elevado por el señor FREDY VARGAS al no notificarle en debida forma la contestación dada frente al derecho de petición elevado el 18 de abril de 2023.

Así las cosas, se le ordenará a la entidad accionada SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI para que en el improrrogable término de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, comunique correctamente al señor FREDY VARGAS la contestación a la petición por él impetrada, a la dirección de correo electrónico que se aportó en dicho documento.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Noveno Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** TUTELAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN elevado por el señor FREDY VARGAS en contra de la SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI, por las razones expuestas en la parte motiva.

**SEGUNDO:** ORDENAR a la SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación proceda a comunicar correctamente al señor FREDY VARGAS la contestación a la petición por él impetrada el 18 de abril de 2023, a la dirección de correo electrónico que se aportó en dicho documento.

**TERCERO:** NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más expedito. No obstante, ante la eventual imposibilidad de enterar a las partes o a terceros interesados en las resultas de la presente acción constitucional, sùrtase dicho trámite por AVISO el que deberá fijarse en la página web de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de esta ciudad.

**CUARTO:** De no ser impugnado el presente fallo, se dispone ENVIAR la presente acción de tutela a la HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL para su eventual revisión, en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 32 del decreto 2591 e1991.

**QUINTO:** Una vez consultada en SIICOR la exclusión de la presente tutela, por secretaria archívese.

**NOTIFÍQUESE**

**ANGELA MARIA ESTUPIÑÁN ARAUJO**  
**JUEZ**